

Chillán, veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro

**Vistos:**

1°.- Comparece la Defensora Penal Pública, María Carrasco Conejeros, en representación de Juan Andrés Reyes Avello, imputado en causa RIT 605-2022, seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Quirihue, interponiendo acción constitucional de amparo en contra de la resolución dictada con fecha 19 de marzo de 2024, por la Magistrada doña Ivonne Alejandra Concha Becerra, en virtud de la cual, de manera ilegal y arbitraria, decreta orden de detención en contra del amparado, constituyendo una afectación a su libertad individual.

Expone que, el 31 de marzo de 2023, el amparado fue formalizado como autos del delito consumado de incendio, contenido en el artículo 476 del Código Penal, estableciéndose un plazo de investigación de 90 días, y la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, hace presente que el plazo inicial de investigación ha sido ampliado en tres oportunidades, y que en los hechos la investigación se ha desarrollado por casi un año. Continúa indicando que en la audiencia de fecha 26 de diciembre de 2023, se fija audiencia de reformatización de la investigación para el día 17 de enero de 2024, por lo que en aquella oportunidad no se apercibe de cierre al Ministerio Público, objetivo para el cual estaba fijada la audiencia, así las cosas, señala que el amparado no asiste a la audiencia de reformatización, pero que, debido a su posterior presentación voluntaria, se vuelve a fijar la audiencia para el día 19 de marzo del año en curso, oportunidad en la cual el amparado no comparece nuevamente, ampliándose la investigación por el plazo de 20 días y solicitando el Ministerios Público que se despache orden de detención en contra del imputado, solicitud a la que la defensa se opone, argumentando que en conformidad al criterio de la Excelentísima Corte Suprema, que en su fallo 4761-2024, se resuelve dejar sin efecto una orden de detención despachada, entendiendo que la institución de la reformatización no se encuentra consagrada en el Código Procesal Penal, siendo ajena al ordenamiento jurídico, y que malamente podría tener la aptitud para restringir o afectar las garantías constitucionales del imputado. Tras lo antes expuesto el tribunal



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WZBPXMXXJKX

resuelve decretar la correspondiente orden de detención, citando en su escrito lo resuelto.

En cuanto al derecho, y tras referirse a la procedencia de la acción de amparo constitucional, señala que la resolución recurrida es arbitraria e ilegal, ya que de haberse ajustado al marco de la legalidad no hubiere sido posible despachar la orden de detención, citando jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, en apoyo a lo expuesto, y concluyendo al respecto que la reformatización no tiene una regulación jurídica en nuestro ordenamiento, por lo cual no es una actuación idónea para afectar una garantía constitucional como lo es la libertad individual. Hace presente que si bien la defensa no se opuso a la audiencia de reformatización, es la actuación emanada de la Magistrada al decretar la orden de detención, que conlleva un carácter privativo de libertad, lo que resulta del todo arbitraria e ilegal.

Señala que lo resuelto es arbitrario al no hacerse cargo de los alegatos defensivos, careciendo de fundamentación suficiente, tampoco se aclara el tenor de la reformatización, respecto a si se trataba de precisiones de hechos primitivamente formalizados, o si conllevaba una reformatización improcedente al alterar el núcleo esencial de los hechos, por otra parte señala que es ilegal, atendido a que es una actuación que no se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico, siendo ajena a éste, careciendo de capacidad para afectar la libertad individual. Continúa citando lo dispuesto en el inciso 4°, del artículo 127, del Código Procesal Penal, indicando que al no estar regulada la actuación, no puede ser condición de la audiencia de reformatización, la presencia del imputado, contraviniendo asimismo lo dispuesto en el artículo 5 del mismo cuerpo legal, y haciendo presente que no es posible asimilar la reformatización, a las formalidades y finalidades de una formalización de cargos, toda vez que dicha actuación si tiene un fundamento normativo que amerita comparecencia, tal como lo regula el artículo 229 del código antes mencionado, vulnerándose, el principio de legalidad, atendido a que solo la constitución y las leyes pueden establecer los casos en que será lícito privar o restringir la libertad de los habitantes, lo cual no



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WZBPXMKXJKX

procedería en estos autos, destacando que no existe sustento normativo, o regla alguna que obligue al imputado a comparecer a la audiencia de reformatización, afectándose en este caso, la libertad individual de la persona, vulnerándose la Ley, la Constitución y los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país.

Estima infringido lo dispuesto en el artículo 19 N°7 letra b) de la Constitución Política de la República, los artículos 1.1, y 7 del Pacto San José de Costa Rica, los artículos 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los artículos 5, 33 inciso tercero, y 122 del Código Procesal Penal, todos los cuales cita en su escrito, citando asimismo abundante jurisprudencia en apoyo a lo antes expuesto.

Finaliza solicitando acoger a tramitación la acción constitucional de amparo, en contra de la resolución pronunciada con fecha 19 de marzo de 2024, por el Juzgado de Letras y Garantía de Quirihue, por medio de la cual, ilegal y arbitrariamente, se decretó orden de detención en contra del amparado, afectando su libertad individual y personal, a objeto de que, previo informe de la recurrida, se acoja la acción en todas sus partes, ordenando que se deje sin efecto la resolución recurrida, y en consecuencia, se deje sin efecto la orden de detención despachada.

**2°.-** Que, informa Ivonne Concha Becerra, Juez Titular del Juzgado de Letras y Garantía de Quirihue, indicando que se tramita la causa RIT O-605-2022, por el delito de incendio del artículo 476 del Código Penal, respecto de dos imputados, siendo uno de ellos el amparado, siendo formalizado el 31 de marzo de 2023, fijándose un plazo de investigación de 90 días, el que ha sido ampliado en tres oportunidades.

Hace presente que respecto del coimputado, Cristian Avello Toledo, el procedimiento se encuentra suspendido en conformidad a lo dispuesto en el artículo 458 del Código Procesal Penal. Así las cosas, el 26 de diciembre de 2023 se fija audiencia de reformatización para el 17 de enero de 2024, no asistiendo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WZBPXMXXJKX

injustificadamente el amparado de autos, y en consecuencia se despacha la correspondiente orden de detención, continua señalando que posteriormente el día 23 de febrero del año en curso, el imputado se presente voluntariamente al tribunal, dejándose sin efecto la orden de detención expedida y fijándose nueva fecha para la audiencia de reformalización, quedando fijada para el día 19 de marzo del año en curso, siendo notificado personalmente el imputado, de la nueva fecha, y apercibiéndose en conformidad a lo dispuesto en los artículos 26 y 33 del Código Procesal Penal.

Indica que nuevamente el imputado no se presenta a la audiencia fijada, estando personalmente notificado y apercibido en conformidad al artículo 33 antes mencionado, por lo que el Ministerio Público solicita se despache nuevamente orden de detención en contra del imputado, a lo que el Tribunal accedió, y audiencia en la cual se amplía el plazo de investigación en 20 días, al existir diligencia pendientes. Hace presente que la defensa se opuso a la orden de detención, fundándose en la inexistencia de la reformalización como actuación procesal, y citando al efecto diversos fallos de la Excelentísima Corte Suprema.

Expone que, efectivamente la reformalización como tal, no está contemplada en la legislación procesal penal, y que conforme a la práctica se ha desarrollado como una necesidad, cuyo objetivo es precisar hechos o circunstancias accidentales que aparecen con el devenir de la investigación, siendo esencial a su juicio, toda vez que la acusación y posterior sentencia deben guardar estricta relación con la formalización, no pudiendo depender aquella precisión buscada, de la mera voluntad del imputado de acudir o no a la audiencia, estimándose que aquella citación debe tener el mismo tratamiento de la citación al acto de formalización, siendo la presencia del imputado un requisito de validez de la audiencia, sin la cual no puede llevarse a cabo, estimando aplicable el artículo 127 inciso 4° del Código Procesal Penal.

Concluye señalando que, estima haber obrado conforme a derecho, no considerando que la actuación judicial haya significado un acto ilegal o arbitrario como lo ha alegado la defensa.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WZBPXMXXJKX

**3°.-** Que, el recurso de amparo tiene por objeto que todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, pueda ocurrir a la magistratura a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

**4°.-** Que, concordante con lo señalado en el considerando precedente, el recurso de amparo, tiene como objeto restablecer el imperio del derecho ante cualquier perturbación, privación o amenaza en el ejercicio de la libertad personal y seguridad individual, que tenga como causa un acto u omisión arbitraria o ilegal.

**5°.-** Que, a fin de resolver las alegaciones de ilegalidad formuladas por la recurrente, en relación a la orden de detención despachada en contra del amparado por la no presentación a la audiencia que debía realizarse el 19 de marzo en curso; es menester acudir a lo que dispone el artículo 33 del mismo cuerpo legal, que establece que el tribunal podrá ordenar que el imputado citado que no compareciere injustificadamente sea detenido o sometido a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva.

**6°.-** Que, por una parte debe tenerse presente que la notificación del amparado para comparecer a la audiencia de reformatización de investigación fue realizada en forma personal en razón de su comparecencia voluntaria al Tribunal el día 23 de febrero del año en curso, ocasión en que se le apercibió al tenor de lo dispuesto en el artículo 33 del Código Procesal Penal, recién transcrito en caso de incomparecencia.

**7°.-** Que, en relación a la audiencia de reformatización, la Excelentísima Corte Suprema, ha sostenido que la actuación procesal del ente persecutor denominado como “reformatización”, corresponde a una institución que no se encuentra expresamente consagrada en el Código Procesal Penal, la que, por ende, resulta ajena al ordenamiento jurídico nacional, -pese a ser efectivo que la misma es comúnmente utilizada y aceptada en la práctica judicial-, por lo que mal



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WZBPXMXXJKX

puede tener la aptitud de restringir o afectar las garantías fundamentales de los imputados respecto de quienes se pretende llevar a cabo.

Así, también ha establecido el máximo Tribunal, que la referida actuación sólo será procedente en la medida que tal comunicación no altere el núcleo sustancial de los cargos que fueron objeto de la imputación, esto es, siempre y cuando el Ministerio Público no incorpore hechos nuevos a la misma, debiendo únicamente limitarse a precisar aquellos que fueron objeto de la primitiva formalización.

8° Que, de lo que se viene exponiendo, resulta que para resolver acerca de la legalidad de la orden de detención despachada en contra del amparado debe analizarse por un lado si se encontraba legalmente citado y si su comparecencia es indispensable para la realización de la audiencia de reformatización.

Cómo se ha referido previamente, el amparado fue notificado personalmente de la resolución que lo cita a la audiencia de reformatización y ampliación de plazo para el día 19 de marzo del presente año y le apercibe en caso de incomparecencia conforme dispone el artículo 33 ya citado.

9°.- Que, si bien la reformatización no se encuentra expresamente reconocida en el Código Procesal Penal, lo cierto es que se trata de una audiencia que se realiza corrientemente y que tiene cabida en la medida que no altere el núcleo de la imputación, tal como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema y como ocurre en la especie, en que se mantiene la calificación jurídica de los hechos.

De esta forma, la denominada audiencia de “reformatización” al ser en realidad una precisión o aclaración de una audiencia de formalización imperfecta o imprecisa, todo ello en beneficio de un debido proceso penal, participa a su vez de su misma naturaleza jurídica, y por ende, se trata simplemente de una audiencia de formalización precisada o aclarada, plenamente válida y procedente en la medida que no altere el núcleo sustancial de los hechos formulados en la audiencia de formalización originaria, y en consecuencia, se le debe aplicar la misma regulación que indican los artículos 229 y siguientes del Código Procesal Penal.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WZBPXMXXJKX

En este orden de ideas, la denominada audiencia de reformatización cumple de manera perfecta el contenido de dicha disposición antes citada, ya que ella también constituye una comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados, con el único agregado de indicar que esa comunicación ha sido precisada o corregida en los hechos o su calificación, respecto de la audiencia originaria o primitiva.

**10°.-** Que, de esta forma, siendo la “reformatización” técnicamente una audiencia de formalización precisada o rectificada, se hace indispensable que dicha comunicación se efectúe en presencia del imputado, tal como lo indica el artículo 229 del Código Procesal Penal, ya que de no comparecer, se hará imposible la precisión o corrección de los hechos o cargos en la formalización primitiva y por lo tanto, no se podrá avanzar en la investigación en aras de un debido proceso penal. Por ende, la presencia del imputado en esta audiencia de reformatización o de precisión o corrección de la formalización es una clara exigencia legal y no una mera exigencia extra normativa.

A su vez, el artículo 127 del Código Procesal Penal dispone en su inciso cuarto que “También se decretará la detención del imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada”. Pues bien, este sería el caso de la audiencia reformatización ya que, como se dijo en el motivo noveno, se trata técnicamente de una audiencia de formalización precisada o rectificada, y que por tanto exige la presencia del imputado como ya se ha señalado.

Pero aun con todo, si lo anterior fuera discutible, de todas maneras esta misma disposición legal señala en su inciso primero que “Salvo en los casos contemplados en el artículo 124, el tribunal, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar la detención del imputado para ser conducido a su presencia, sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada o dificultada”, cuestión que también aconteció en el presente caso, ya que el



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WZBPXMXXJKX

imputado de forma injustificada no compareció, por segunda vez, a la audiencia de reformatización.

**11°.-** Que, finalmente, el presente caso no es asimilable exactamente al amparo rol 46-2024 de esta misma Corte, citado por la recurrente, ya que, si bien se refiere a la jurisprudencia del Máximo Tribunal que no reconoce ajustada a derecho la orden de detención dictada en virtud de la audiencia de reformatización, el motivo principal por la cual se dio lugar a esa acción constitucional fue la circunstancia de ordenar el tribunal una detención sin que se haya constado el apercibimiento al imputado que exige el artículo 33 del Código Procesal Penal, por lo que, si bien el amparado se encontraba válidamente citado para comparecer a la audiencia programada, no constaba que se le hubiera efectuado tal apercibimiento concerniente a los efectos de su incomparecencia, según se indica en el motivo 6° del referido fallo, hipótesis que no concurrió en el presente caso.

**12°.-** Que, de todo lo dicho, resulta que si un Juzgado de Garantía ordena mediante una resolución judicial la presencia del imputado bajo el apercibimiento de los artículos 26 y 33 del Código Procesal Penal para una audiencia de reformatización -que sí tiene cobertura normativa- y éste no comparece siendo injustificada su incomparecencia, no puede sostenerse que la orden del tribunal que ordena su detención sea ilegal o arbitraria, desde que el mismo artículo 33 del Código ya citado, en forma expresa lo permite, lo que evidencia que si el imputado injustificadamente decide no comparecer a la audiencia a la que fue citado, la orden de detención es plenamente ajustada a derecho.

En tal contexto, la detención del imputado, decretada por el juez competente, en conformidad a los artículos 26, 33 y 127 del Código Procesal Penal, no afecta ilegal ni arbitrariamente la libertad del amparado y consecuentemente el presente arbitrio no puede prosperar.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 21 de la Constitución Política de la República, **se rechaza**, sin costas, el recurso de amparo interpuesto por la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WZBPXMXXJKX



Defensora Penal Público doña María Daniela Carrasco Conejeros, en representación de don JUAN ANDRES REYES AVELLO.

Regístrese, notifíquese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. Fiscal Judicial Solón Viguera Seguel.

**Rol 62-2024.- Amparo**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WZBPXMXXJKX

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S., Ministra Paulina Gallardo G. y Fiscal Judicial Solon Rodrigo Viguera S. Chillan, veintiseis de marzo de dos mil veinticuatro.

En Chillan, a veintiseis de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WZBPXMXXJKX